

Empresarios urgen "corregir ley Lafkenche" y aplazar nuevas solicitudes de borde costero para comunidades indígenas

Gremios empresariales de la Macrozona Sur de Chile pertenecientes a la Sofofa, desde Ñuble hasta Magallanes, hicieron un llamado urgente a las autoridades para corregir la Ley Lafkenche, enfatizando su impacto divisorio en comunidades y sectores productivos.



La preocupación surgió a raíz de los recientes eventos en Aysén y Puerto Montt, relacionados con las votaciones de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) y las solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la polémica normativa.

"Hacemos un fuerte llamado a las autoridades a corregir la Ley Lafkenche para promover una adecuada política de desarrollo sostenible del borde costero", señalaron los gremios en una declaración conjunta. Además, sugirieron establecer una moratoria sobre nuevas solicitudes hasta que se logren las correcciones necesarias para revertir la tendencia actual. "Es fundamental trabajar en conjunto para identificar soluciones que permitan conciliar los intereses de todas las partes involucradas y promover un desarrollo económico inclusivo y equitativo para Chile", resaltaron. En una reunión reciente en Puerto Montt, los gremios de la Macrozona Sur, junto con el Comité Ejecutivo de Sofofa, abordaron diversos temas que afectan el desarrollo regional. Subrayaron la importancia de la actividad minera, forestal, acuícola/pesquera y agroindustrial para la economía y la creación de empleos estables y de calidad. Sin embargo, destacaron que la seguridad, la inversión y la certeza jurídica enfrentan barreras significativas que dificultan el crecimiento. "La actividad económica en nuestra región es vital para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Mientras el mundo avanza en su desarrollo, vemos que Chile, pese a sus ventajas competitivas y su aporte al desarrollo sostenible, está desperdiciando oportunidades para generar empleos estables y de calidad," afirmaron los gremios. Además, subrayaron la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, destacando el avance de la violencia rural hacia la provincia de Osorno. Por ello, solicitaron la extensión del Estado de Excepción a este territorio, a través de una adecuada coordinación y alianza público-privada con las autoridades locales.